



final de exposición pública se han recogido numerosas alegaciones. El 40% de ellas se han incorporado. Y ahora, después del contacto con todas las organizaciones del sector, vamos a los últimos trámites. Tenemos el compromiso de, a lo largo de este mes, poderle introducir los últimos retoques. Vamos a adecuar ese plan para aquellas pequeñas cosas que todavía pueden ser modificables, y que no sean una exigencia ni un requisito que se fije a nivel nacional o a nivel europeo. Yo espero que, antes de los dos meses de plazo, le contestemos al Ministerio que esa orden está publicada o pendiente de publicación si un trámite tarda un poco más; una vez que se haya llegado a ese punto, solo queda su publicación.

—El sector porcino está limitado ahora por las medidas para las concesiones de agua de la CHS, y hay problemas para desbloquear nuevas granjas de otras cabañas. ¿La Consejería está tomando parte en este asunto para desatascar esta situación?

—Hay que ir de la mano con las competencias urbanísticas de los ayuntamientos y con la competencia de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma. El planteamiento de la Consejería es buscar la solución lógica y factible. Nuestras producciones ganaderas son un sector económico importante más, y su actividad,

el tratamiento de los residuos y el suministro de agua tienen que estar garantizados y cumplir con la normativa. Tenemos que abandonar esa polémica que se ha planteado y que creo que muchas veces es forzada y es de utilización política. Nuestro sector ganadero tiene que dejar de estar demonizado y tenemos que gestionar

de acuerdo a la normativa, incluso aprovechando los residuos que generan. Hay iniciativas privadas que quieren darle solución porque necesitan un gestor de residuos y, en materia de ordenación urbanística, se hace necesaria esa coordinación con la Consejería de Infraestructuras y con los ayuntamientos, a través de la

Federación de Municipios, para poner en marcha algún plan que ordene la implantación de estos proyectos en nuestro territorio regional.

—¿Está de acuerdo en reformar la ley del Mar Menor? ¿En qué puntos?

—Nuestros agricultores han demostrado que son los defensores más próximos al medio natural que hay, porque están todo el día en el terreno. Las leyes tienen que actualizarse, y más en un sector que se tecnifica, que avanza, que se moderniza, que está condicionado por la normativa europea... Actualizar la ley del Mar Menor, en base a la evolución de los datos que tengamos, tiene que ser algo natural. Ya está planteada una modificación, vamos a ver si los diputados de la Asamblea Regional consiguen sacarla adelante.

—El Ministerio ya le abrió la puerta a la Comunidad para drenar el acuífero Cuaternario. ¿Cuál sería el problema para plantear una solución conjunta?

—Tenemos que adoptar alguna medida con el acuífero. El nivel freático está influyendo en nuestra red de saneamiento y depuración y en las construcciones. Tenemos que buscar el equilibrio. De hecho, esa será una cuestión que abordaré con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la reunión que espero tener con ella.

—El informe sobre los metales pesados en fincas agrícolas del Campo de Cartagena fue la última piedra en el camino que se encontró su antecesora. ¿Lo hubiera gestionado de forma diferente? ¿Tienen identificados los terrenos agrícolas más afectados por estas concentraciones? ¿Qué medidas tomarán?

—La consejera Rubira abordó la cuestión de forma absolutamente correcta y objetiva. Los servicios técnicos de la Consejería son los que analizan tanto si el contenido se ajusta al encargo que se había hecho y si la justificación de los gastos que ha conllevado el informe se ajusta a la financiación que se había otorgado. Bien directamente nosotros o bien con la Consejería de Medio Ambiente tendremos que hacer el análisis en profundidad de esas zonas donde pueda detectarse alguna cuestión que sea relevante. Pero el informe también pone de manifiesto la no afección a la salud pública de esos contenidos del suelo porque no son solubles y no pasan a ninguna producción. Lo que haremos es profundizar para tener la información correcta y, en su caso, si es necesario adoptar alguna medida, se adoptará.

«Mercosur nos ofrece oportunidades y también ciertos riesgos»

A. S. / M. B.
Murcia

—Europa va a debatir estas semanas el presupuesto de la futura PAC y de los planes de desarrollo rural para el próximo Marco Financiero Plurianual. Se prevé un recorte importante y una pelea por los fondos.

—Es verdad que nos enfrentamos a otro momento importante para la definición del nuevo periodo de financiación de las políticas agraria y pesquera. La respuesta del Parlamento Europeo a la Comisión fue clara: hubo un rechazo frontal. Las regiones y el Gobierno de España hicieron su trabajo y se puso de manifiesto que no está-

bamos de acuerdo. La primera cuestión fundamental es el presupuesto; si está, ya podemos entrar a ver cómo se organiza. La última propuesta corrige en algo la inicial, pero creemos que no es suficiente, por lo que todavía no se va a alcanzar un acuerdo.

—La hiperregulación de la UE en materia agrícola y los últimos acuerdos comerciales con Mercosur o Marruecos han encendido la mecha de las protestas del sector agro en España.

—El acuerdo de Mercosur nos ofrece oportunidades y también ciertos

riesgos, pero nuestras producciones agrícolas no tienen miedo de enfrentarse a productores de otros países. Lo que hay que establecer son cláusulas que garanticen unas condiciones en cuanto a la calidad de los productos que se exigen aquí en Europa y en sus sistemas de producción. No tenemos problemas para competir con eso. Cuando la Comisión Europea está poniendo el foco en la reducción de la huella de carbono, lo que no podemos hacer es dejar de producir aquí y plantear el transporte desde Suramérica.